

Branda
Zavala
9:30 am
21/07/2020



DOCUMENTOS PRESENTADOS

- 1- Informe de Situación: Deficiencias del Sistema Nacional Integrado de Salud en el contexto de la Pandemia por Covid-19;
- 2- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar Serrano ante las deficiencias del Sistema Nacional Integrado de Salud. Documento de fecha 31 de agosto de 2020;
- 3- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar Serrano ante el Colapso del Sistema Nacional Integrado de Salud de El Salvador frente al Covid-19. Documento de fecha 13 de julio de 2020;
- 4- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos Licenciado José Apolonio Tobar Serrano denominado: La Pandemia generada por el Covid-19, nos sigue ganando la batalla y nuestros gobernantes continúan en conflicto, por lo que el Procurador expone... Documento de fecha 10 de julio de 2020;
- 5- Comunicado del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar en conmemoración del día del profesional de la medicina, en memoria y reconocimiento de las personas trabajadoras de la salud que han fallecido víctimas del Covid-19. Documento de fecha 14 de julio de 2020;
- 6- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar Serrano ante el aumento de casos de personas trabajadoras de la salud con resultados positivos de Covid-19 o sospechas del mismo. Documento de fecha 17 de abril de 2020;
- 7- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar Serrano en el día del trabajador y trabajadora en el contexto de la pandemia por Covid-19. Documento de fecha 1 de mayo de 2020;
- 8- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar Serrano ante afectaciones a los derechos humanos de la salud, trabajo y alimentación en el marco del Covid-19. Documento de fecha 12 de mayo de 2020;
- 9- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar Serrano ante las afectaciones al derecho a la vida, integridad personal y a la salud por el uso de la hidroxicloroquina como tratamiento del Covid-19. Documento de fecha 2 de junio de 2020;
- 10- Informe Preliminar sobre Covid-19 y Derechos Humanos en El Salvador, presentado por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar Serrano. Documento de junio de 2020.



INFORME DE SITUACIÓN

DEFICIENCIAS DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19

1. Desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se ha venido señalando las precariedades, deficiencias y dificultades que presenta el sistema de salud, el cual se ha caracterizado por la insuficiencia en las asignaciones presupuestarias, provisión y existencia de medicamentos, infraestructura inadecuada, falta de equipos, camas, recursos y personal; alta segmentación, inequidad y fragmentación; limitaciones en el alcance geográfico; y serios problemas de calidad y calidez en la atención¹.

2. Mientras no se atienda de forma adecuada esta problemática, continuarán siendo cotidianas las expresiones de inconformidad de la población ante la insuficiencia y el deterioro de los insumos y el equipo médico, la falta de medicamentos y de personal en salud, los prolongados intervalos de espera para las citas con especialistas, la baja calidad en la atención por parte del personal, la negligencia o mala praxis por parte del personal de salud, la saturación de los establecimientos y el deterioro de la infraestructura², ausencia de médicos especialistas en diversas áreas de la medicina, sobre carga laboral de los médicos y demás personal de salud, ausencia de medidas preventivas en casos de epidemias, incluso la falta de acceso para las personas a la información en salud³.

3. Una deficiencia fundamental del sistema de salud que esta Procuraduría ha venido señalando por varios años es la inequidad que genera la forma en la que fue construido el mismo. Actualmente existen seis instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud: El Ministerio de Salud (MINSAL), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), el Comando de Sanidad Militar (COSAM), el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) y el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), contando además con el sector privado lucrativo y no lucrativo.

Esto genera una alta fragmentación, segmentación e inequidad en el sistema, lo cual ha provocado que la población reciba asistencia en salud de calidad muy diferente, ya que cada una de estas instituciones atiende a un segmento de la población y cuenta con un presupuesto diferente, lo que hace que la inversión por persona de cada una de ellas sea muy dispar. Lo anterior queda en evidencia al observar que en el año 2012, el gasto per cápita del MINSAL fue de ciento catorce dólares de los Estados Unidos de América (\$114.00); mientras, que para ese mismo año en el ISSS fue de doscientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de América (\$237.00); en el COSAM fue de doscientos cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América (\$251.00); y en el ISBM fue de quinientos veintiocho dólares de los Estados Unidos de América (\$528.00).

¹ Informes de las organizaciones sociales y la PDDH, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el marco del examen de los informes periódicos Tercero, Cuarto y Quinto combinados de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), octubre 2014, Pág. 98.

² Ibid., pág. 98, párrafo quinto.

³ Informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, julio 2002- junio 2003, El Derecho a la Salud, pág. 86.

4. En el año 2019 se aprobó la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que establece los principios y normas generales para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, mediante un proceso progresivo hacia el acceso y cobertura universal de la salud, en forma equitativa, oportuna y de calidad para la población en los diferentes niveles de atención; sin embargo, la normativa aludida no ha resuelto la problemática existente, debido que no modifica la fragmentación institucional, por lo tanto, los segmentos de la población continúan recibiendo servicios de salud con una alta inequidad y trato diferenciado, lo que resulta discriminatorio para la mayoría de las personas que atiende.

5. Antes de una reforma política se debe realizar un esfuerzo normativo para establecer un único Sistema de Salud que garantice el acceso y cobertura universal en salud en igualdad de condiciones, en forma equitativa, oportuna y de calidad para la población en los diferentes niveles de atención, garantizando acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas y epidémicas, contratación suficiente de personal de salud (capacitado, motivado y equipado para prestar servicios que respondan a las necesidades de los pacientes, basadas en evidencia científica y bajo el pleno respeto a la dignidad humana)⁴.

6. Las políticas públicas en el área de salud, deben estar centradas necesariamente en el principio de solidaridad, en el paciente, en la persona, en el grupo social y su entorno; es decir, no necesariamente solo en la enfermedad, para evitar la existencia de un sistema de salud, inalcanzable, injusto, insostenible y fragmentado carente de calidad y que solo opere por la oferta privada de servicios, lejos del alcance de las grandes mayorías.

ANTE LA CRISIS POR LA PANDEMIA POR COVID-19

7. La crisis generada por la pandemia COVID-19 está resaltando la necesidad de concertar un sistema integrado de salud, eficaz, eficiente y cada vez más solidario, lo que necesariamente requiere de la aplicación efectiva de un enfoque de derechos humanos, multisectorial y comprehensivo para atender la salud y sus efectos sociales y económicos, exaltando los valores de equidad y no discriminación, fortaleciendo el sistema nacional, el de protección social, el de atención a grupos vulnerables que incluya a la niñez, adultos mayores, mujeres y pacientes con enfermedades crónicas⁵;

8. Evidencia clara durante esta Pandemia ha sido el no funcionamiento del llamado Sistema Nacional Integrado de Salud, cuando no ha existido un Plan Nacional Integral de abordaje de la Pandemia por Covid-19, en donde todos las instituciones que conforman dicho sistema estuvieran debidamente coordinadas para poder brindar una adecuada atención médica a la población, lo cual, ha derivado en afectaciones directas a los pacientes usuarios de dicho sistema, quienes han tenido que ser trasladados de establecimientos de salud de la ciudad de San Salvador a establecimientos de los departamentos del interior del país para su atención, lo

⁴ Pronunciamento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar Serrano ante las deficiencias del Sistema Nacional Integrado de Salud, de fecha 29 de agosto de 2020, Párrafo 7.

⁵ Ibid. párrafo IV



PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

que ha puesto en mayor riesgo al paciente, imposibilitando incluso los derechos de los familiares para acceder a información relativa al estado de salud del paciente.

9. La falta de implementación de protocolos, de equipos especiales de bioseguridad y de capacitaciones oportunas, provocadas por la improvisación, ahorro de recursos y la falta de conducción científica en el manejo de la pandemia, provocó que un gran número de personal sanitario que atendió la pandemia sin mayor información, resultara contagiado e ingresado a diversos centros de salud donde continuó el contagio.

10. La desinformación u ocultación de datos y el manejo político partidarista o propagandístico de la emergencia generada por el COVID-19 en cada una de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Integrado de Salud ha implicado para el personal de salud afectaciones en cuanto al abordaje clínico hacia los pacientes, así como, ante las medidas de bioseguridad que debían adoptar para salvaguardar su vida frente al Covid-19, más grave aún resultó para todos aquellos pacientes con enfermedades crónicas que sus procedimientos y tratamientos fueron suspendidos, así como su consulta externa, cito como ejemplo el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica, que además de no contar con los servicios de salud, también se les imposibilitó su acceso a los establecimientos por la falta del transporte, lo que para muchos pacientes tal situación generó -además de sus padecimientos- alto estrés, temor y miedo de perder su vida por no contar con atención oportuna, agudizando su estado de salud, llevándoles a consecuencias fatales como la muerte. Similar situación han vivido los demás pacientes con enfermedades crónicas, que reciben atención en el referido Sistema⁶.

11. La crisis sanitaria actual no solo se acrecienta por la improvisación y precariedad del sistema, sino porque las acciones para combatir el virus, han implicado una serie de violaciones a otros derechos (No hay rendición de cuentas, no se presentan estrategias nacionales y se privilegia la confrontación, el desprestigio del adversario y el desconocimiento de la institucionalidad democrática).

12. A la fecha, no existe lineamientos claros sobre el tratamiento o protocolos a seguir para la atención de las personas que ingresen al país, prevaleciendo la improvisación y la incertidumbre, a casi 8 meses de la existencia de la pandemia en el país; por tanto, la espontaneidad continúa siendo la mejor de las características para la implementación de medidas frente a la pandemia.

13. Otra evidencia clara respecto a la falta de una verdadera integración del Sistema de Salud es la falta de transparencia en el manejo de fondos e información con respecto a la emergencia nacional, en donde se habla por parte del MINSAL como único sistema, no brindando datos específicos respecto a las demás instituciones que conforman ese sistema (ISSS, ISBM, COSAM, FOSALUD, ISRI, incluso sobre el rol y reglas que el sector Privado lucrativo y no lucrativo representan ante la pandemia por Covid-19; por lo que esta Procuraduría ha exhortado al gobierno de la República a mantener un sistema nacional de información y

⁶ Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar Serrano, ante afectaciones a los Derechos Humanos de la Salud, Trabajo y Alimentación en el macro del Covid-19, de fecha 12 de mayo de 2020.

manejo de datos como garantía de la transparencia y la rendición de cuentas; es decir, se ha exhortado al gobierno en múltiples ocasiones, a ser más transparente, inclusivo y responsable

en el proceso de rendición de cuentas y manejo de la emergencia, respetando en todo caso, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Consolidado de casos atendidos durante la pandemia por Covid-19:

14. A la fecha, según el consolidado de la PDDH, desde el período del 21 marzo al 17 de septiembre de 2020 se han recibido 1811 hechos denunciados sobre afectaciones a derechos humanos ocurridos en la emergencia por Covid-19⁷, de los cuales sobre el derecho a la libertad personal se reportaron 687 vinculados a detenciones arbitrarias o ilegales; sobre el derecho a la salud 393 relacionados a la denegación de atención médica y negación de pruebas COVID 19 y por falta de atención a otras enfermedades y tratamientos como efecto colateral; en relación al derecho al trabajo 242 que se refieren a suspensión de contratos, falta de insumos para protección laboral y falta de pago de salarios y prestaciones, entre otros; sobre el derecho de acceso a la información 209 relativos a dudas con respecto a medidas estatales y la negativa de entregar pruebas de resultado COVID19; y sobre el derecho al agua, alimentación y no discriminación 164 por falta de acceso al agua o alimentos, situaciones de exclusión y abuso*.

15. Los principales hallazgos derivados del análisis de los casos recibidos, destacando algunos datos que caracterizan el perfil de las víctimas, los derechos y hechos violatorios más señalados, las instituciones vinculadas y las circunstancias específicas de las mujeres y los grupos en mayor condición de vulnerabilidad, están reflejados en el documento denominado Informe Preliminar sobre Covid-19 y Derechos Humanos en El Salvador, emitido por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de junio de 2020., a partir del Romano III, páginas de la 39-43, mismo que se anexa al presente.

CASOS EMBLEMÁTICOS ATENDIDOS POR PDDH EN EL MARCO DEL COVID-19 Y ACCIONES REALIZADAS

- 1- Caso sobre vulneración al derecho humano a la vida, integridad personal y a la salud del personal de salud (personal médico, de enfermería, auxiliares de servicio, personal administrativo, conductores de ambulancias, personal de limpieza, entre otros) en las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud por la no provisión por parte del Estado de forma oportuna y de calidad de los equipos de protección personal, por la falta de un plan de abordaje de la pandemia por Covid-19 de insumos, entre otros.

Según información de medios de comunicación se tiene conocimiento que el Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende a la fecha 17 de septiembre de 2020 contabiliza 136 decesos de trabajadores de la salud, de ellos 54 médicos, 30 del

⁷ Fuente: PDDH, elaboración propia con datos registrados en sistema institucional a nivel nacional.

*Datos preliminares sujetos a verificación



PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

personal de enfermería, 30 de servicios generales y personal administrativo y 2 estudiantes de medicina.⁸

“El 18% de fallecidos por Covid-19 en El Salvador eran del personal de salud”, el Gobierno se niega a brindar en detalle la información sobre las muertes del personal de salud a causa de Covid-19.⁹

Acciones realizadas:

- ✓ Se abre denuncia de oficio, misma que es sustentada por denuncias presentadas por el Sindicato del Hospital Nacional Especializado Rosales SMHNR y el Sindicato de Trabajadores de la Salud SITRASALUD, a la vez, por información brindada en los distintos medios de comunicación del país.
- ✓ Se han girado los oficios a las autoridades competentes en salud solicitando el informe respectivo y que realicen las acciones de su competencia para solucionar la problemática. **Oficios de los cuales, a la fecha no se ha obtenido respuesta.**
- ✓ Se han emitido Pronunciamientos por medio de los cuales se exhorta al Estado a brindar soluciones a la problemática;

I- Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos denominado: La Pandemia generada por el Covid-19, nos sigue ganando la batalla y nuestros gobernantes continúan en conflicto, por lo que el **Procurador EXHORTA:**

“1. Al Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí, que presente un plan integral de abordaje a la pandemia generada por el Covid -19,; en el que se incluya el equipamiento total y adecuado a todo el personal de salud para evitar que dicho sector continúe siendo contagiado por el referido virus. 2. Al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortíz, que priorice en su retórica el diálogo con la paciencia, diligencia, humildad, tolerancia, sabiduría, objetividad y capacidad de concertación que caracteriza a un buen estadista; para hacer efectivo el mandato previsto en los artículos 1, 167, ordinal 2° y 168 ordinal 3° de la Constitución de la República; 3. A los y las Diputadas de la Asamblea Legislativa construir, discutir y aprobar una normativa que cumpla los parámetros previstos por la Sala de lo Constitucional en la sentencia el día 8-VI-2020 en el proceso INC. 21-2020acumulado, recordando que el imperativo del artículo 1 de la Constitución de la República también les es aplicable. 4. A los señores y señora Magistrada de la Sala de lo Constitucional que, dentro de sus facultades constitucionales y legales, generen el mecanismo correspondiente de seguimiento para verificar el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia emitida el día 8-VI-2020 en el proceso Inc. 21-2020acumulado. 5. A la población en general, practicar hábitos de higiene personal, tales como el lavado constante de manos, y normalizar

⁸ El Salvador.com, fecha 17 de septiembre de 2020, Tweet recuperado de: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/heroes-de-primera-linea-coronavirus/754564/2020/>.

⁹ La Prensa Gráfica, de fecha 3 de septiembre de 2020. El 18% de fallecidos por Covid-19 en El Salvador eran del personal de salud. Tweet recuperado de: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/18-de-muertes-por-covid-19-eran---personal-de-salud-20200902-0083.html>.

el uso de mascarilla guardando el distanciamiento físico.” Documento de fecha 10 de julio de 2020.

- II- Pronunciamento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar Serrano en el día del trabajador y trabajadora en el contexto de la pandemia por Covid-19, de fecha 1 de mayo de 2020.
 - III- Pronunciamento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar Serrano ante el aumento de casos de personas trabajadoras de la salud con resultados positivos de Covid-19 o sospechas del mismo, de fecha 17 de abril de 2020.
 - IV- Comunicado del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar en conmemoración del día del profesional de la medicina, en memoria y reconocimiento de las personas trabajadoras de la salud que han fallecido víctimas del Covid-19, de fecha 14 de julio de 2020.
- 2- Caso sobre la crisis sanitaria y el colapso del Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que ha derivado en graves violaciones a derechos humanos.

Acciones realizadas:

- ✓ Se han girado los oficios a las autoridades competentes en salud para solucionar la problemática, oficios de los cuales a la fecha no se ha obtenido respuesta.
 - ✓ Se han emitido Pronunciamientos por medio de los cuales se exhorta al Estado a brindar soluciones a la problemática;
- I. Pronunciamento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar Serrano ante el Colapso del Sistema Nacional Integrado de Salud de El Salvador Frente al Covid-19, de fecha 11 de julio de 2020, en el que **EXHORTA:**

“Al Presidente de la República señor Nayib Armando Bukele Ortiz, al señor Ministro de Salud doctor Francisco José Alabí Montoya, a la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social licenciada Rosa Delmy Cañas de Zacarías, a la Presidenta del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Licenciada Silvia Azucena Canales Lazo, al Coronel Amílcar Salvador Mejía del Comando de Sanidad Militar, para que de forma conjunta con expertos en salud, con representantes del Colegio Médico de El Salvador y del sector privado que brinda servicios de salud, con carácter urgente elaboren un plan de abordaje para la atención de la pandemia por Covid-19, ante el colapso del Sistema Nacional Integrado de Salud, debido a la improvisación en la atención, la falta de un trabajo coordinado, la falta de protección para el personal de salud, la falta de acceso a la información, por ello, dicho plan de abordaje debe tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos, por lo tanto es esencial que contenga las siguientes medidas:



PROCURADURÍA
PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

- a) Unificación de criterios en cuanto la atención que se brinda en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud;
 - b) Acceso a la información para las personas usuarias del Sistema Nacional Integrado de Salud y para el resto de la población, sobre medidas de prevención, contención, tratamiento, rehabilitación y evolución del Covid-19, así como para el acceso a los servicios de salud;
 - c) Definir los establecimientos para la atención a pacientes con Covid-19 y de aquellos que requieren atención por otras patologías médicas o quirúrgicas, o en su caso las áreas específicas en los establecimientos de salud habilitadas para la atención, siempre evitando el contagio cruzado para los pacientes, familiares y personal de salud;
 - d) Protección adecuada a los trabajadores de la salud, brindándoles el equipo de protección personal adecuado (nivel 2 y 3) para el desempeño de su trabajo, los insumos, medicamentos y equipos necesarios para brindar la atención.
 - e) Activar el primer y segundo nivel de atención, o su equivalente en los demás sectores que brindan servicios de salud, para desarrollar un trabajo conjunto, coordinado e integrado tal como está diseñado el Sistema de Salud.
 - f) Observando que las pandemias tienen el potencial de afectar gravemente el derecho a la salud, por el riesgo sanitario inherente en la transmisión y adquisición de la infección, considerar la exposición sobre el personal de salud, a quienes ineludiblemente se les debe garantizar los equipos de protección personal y todas las herramientas que les permitan realizar sus labores, de lo contrario se les está conminando a una muerte segura, consecuentemente a la población salvadoreña al no tener recursos humanos en salud para su debida atención.
 - g) Garantizar la realización de pruebas de Covid-19 al personal de salud y a los pacientes, así como su respectivo procesamiento, debiendo informar los resultados de forma oportuna.
 - h) Al señor Presidente de la República señor Nayib Armando Bukele Ortiz, transparentar el mecanismo de realización de las pruebas de Covid-19, y los sectores de la población sujetos a la misma. Exhortándole a la vez, tomar en cuenta las personas con afectaciones en su salud, así como los trabajadores de la salud.
 - i) Adoptar todas las medidas posibles para dotar de los equipos, insumos, medicamentos y recursos humanos a los denominados hospitales “temporales” sin menoscabar el funcionamiento del resto de hospitales del Sistema Nacional Integrado de Salud. Las medidas que los expertos en salud recomienden, sobre la base de la información que a la fecha se tenga sobre la evolución de la pandemia.
 - j) Asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública frente a la pandemia del Covid-19.
 - k) Asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública frente a la pandemia del Covid-19
- II. Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar Serrano ante afectaciones a los derechos humanos salud, trabajo y alimentación en el marco del Covid-19, de fecha 12 de mayo de 2020.

III. Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos licenciado José Apolonio Tobar Serrano ante las deficiencias del Sistema Nacional Integrado de Salud, de fecha 31 de agosto de 2020, entre otros...

3- Caso sobre vulneración de derechos a personas adultas mayores residentes en el Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar

Acciones realizadas:

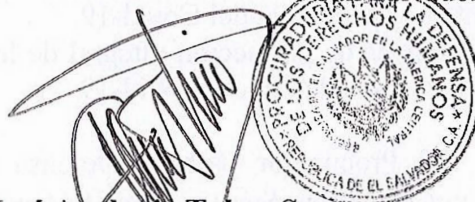
- ✓ Apertura de expediente y resolución final (en etapa de revisión) sobre el caso.
- ✓ Se han girado los oficios a las autoridades competentes en salud para solucionar la problemática.
- ✓ Se han realizado verificaciones telefónicas a nivel nacional sobre la situación de los centros de atención de personas adultas mayores antes y durante la pandemia por Covid-19.

Resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, Parte Considerativa, romano I, párrafo 8, “el contenido del derecho a la salud incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación”.

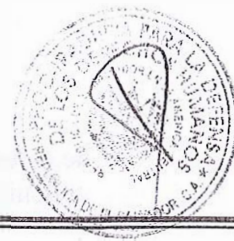
Así también, en la resolución aludida se establece que en las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto a los derechos humanos y sobre todo, deben ser legales, necesarias, proporcionales y no discriminatorias.

Tal como lo ha manifestado el señor Secretario General de Naciones Unidas “...La mejor respuesta (a la pandemia) es aquella que responde proporcionalmente a las amenazas inmediatas mientras se protege los derechos humanos y el Estado de Derecho”.

San Salvador, 21 de septiembre 2020.



José Apolonio Tobar Serrano.
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.



Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos José Apolonio Tobar Serrano ante las deficiencias del Sistema Nacional Integrado de Salud.

CONSIDERANDO:

I. Que la OMS, define a la salud como “un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades o discapacidad;

II. Que el derecho a la salud, está estrecha e íntimamente ligado a otros derechos humanos fundamentales y su materialización depende de la realización de estos otros, especialmente el derecho al agua (que incluye el derecho al acceso al agua potable y a saneamiento adecuado) y el derecho a la alimentación.

III. Que además de los principios de universalidad y no discriminación, los derechos humanos, entre ellos el Derecho a la Salud, están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles; es decir, no se pueden respetar unos sí y otros no, todos son inherentes a la persona humana y la satisfacción de uno influye en el disfrute de otros;

IV. Que la crisis generada por la pandemia COVID-19 está resaltando la necesidad de concertar un sistema integrado de salud, eficaz, eficiente y cada vez más solidario, lo que necesariamente requiere de la aplicación efectiva de un enfoque de derechos humanos, multisectorial y comprehensivo para atender la salud y sus efectos sociales y económicos; exaltando los valores de equidad y no discriminación, fortaleciendo el sistema nacional, el de protección social, el de atención a grupos vulnerables que incluya a la niñez, adultos mayores, mujeres y pacientes con enfermedades crónicas;

V. Que las políticas públicas en el área de salud, deben estar centradas necesariamente en el principio de solidaridad, en el paciente, en la persona, en el grupo social y su entorno; es decir, no necesariamente solo en la enfermedad, para evitar la existencia de un sistema de salud, inalcanzable, injusto, insostenible y fragmentado carente de calidad y que solo opere por la oferta privada de servicios, lejos del alcance de las grandes mayorías;

VI. Que se vuelve imperativo que el sistema nacional de salud mejore y fortalezca sustancialmente su capacidad de información y disponga datos fiables, oportunos y desagregados que le permitan una panorámica para la toma de decisiones e incorporar opiniones de calificación científica de manera concertada, informada y participativa;

VII. Que toda iniciativa gubernamental en la lucha contra la injusticia y la inequidad; es decir, toda actividad dirigida a erradicar la exclusión social y económica; acciones contra la pobreza y la desigualdad y especial en el tema de salud deben convertirse en un objetivo alcanzable y guía del desarrollo humano sostenible en términos económicos, sociales, culturales y ambientales;

VIII. Que es necesaria la concertación aún en las divergencias para establecer un programa de actuación en materia económica y social que parta de acuerdos nacionales sostenibles, bajo el enfoque

de derechos humanos, que incluya la cobertura sanitaria universal de servicios de salud de calidad, la sostenibilidad y la accesibilidad a un sistema gratuito y solidario basada en el derecho a la salud;

IX. Que la Resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, Parte Considerativa, romano I, párrafo 8, “el contenido del derecho a la salud incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación”.

Sobre la base de las facultades de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos y supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas reguladas en el artículo 194 romano I ordinales 1 y 7 de la Constitución de la República; en razón de lo que determina el artículo 65 de la misma Carta Magna (“La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento”); y lo previstos en el artículo 50 de la misma (“La seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio...”), en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, **EXPRESO:**

1. Me pronuncio en contra de las declaraciones que puedan llegar a afectar el derecho a la salud de la población salvadoreña, especialmente los intentos de privatización, la exclusión y la falta de acceso a todos los servicios de salud, la desatención de pacientes con enfermedades crónicas y desabastecimiento de medicamentos, con argumentos que el sistema está enfocado en la contención del COVID-19.
2. me pronuncio en contra de la falta de transparencia en el manejo de fondos e información con respecto a la emergencia nacional, exhortando al gobierno de la República a mantener un sistema nacional de información y manejo de datos como garantía de la transparencia y la rendición de cuentas.
3. La crisis sanitaria actual no solo se acrecienta por la improvisación y precariedad del sistema, sino que las acciones para combatir el virus, han implicado una serie de violaciones a otros derechos (No hay rendición de cuentas, no se presentan estrategias nacionales y se privilegia la confrontación, el desprestigio del adversario y el desconocimiento de la institucionalidad democrática).
4. Es evidente la necesidad de un proceso de reforma en el Sistema Nacional de Salud, sin que ello implique que “lo privado funcione mejor”. Dicha reforma debe suscribirse a derechos humanos, más allá del asistencialismo, la salud abarca en su contexto aspectos culturales, medioambientales, habitacionales, nutricionales, laborales, servicios básicos y otras acciones positivas que aseguren el bienestar y el desarrollo de personas y las comunidades.
5. El Sistema Nacional de Salud requiere de una nueva filosofía y estrategia basada en la ética y la equidad que requiere algunas condiciones previas como basarse en marcos legales que aseguren iguales derechos para todos, incluyendo el acceso en igualdad de condiciones a los servicios de prevención y atención en salud con equidad en todas las políticas que aseguren mecanismos de participación para que todas las personas tengan acceso a la información sobre la salud, las políticas públicas y mecanismos de financiación con mayor equidad para que la salud sea para todas las personas.
6. Con la aprobación en el año 2019 de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, se realizó un esfuerzo normativo para establecer los principios y normas generales para la




**PROCURADURÍA
PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

organización y funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, mediante un proceso progresivo hacia el acceso y cobertura universal de la salud, en forma equitativa, oportuna y de calidad para la población en los diferentes niveles de atención; sin embargo, la normativa aludida no ha resuelto la problemática existente, debido que no modifica la fragmentación institucional, por lo tanto, los segmentos de la población continúan recibiendo servicios de salud con una alta inequidad y trato diferenciado, lo que resulta discriminatorio para la mayoría de las personas que atiende.

7. Antes de una reforma política se debe realizar un esfuerzo normativo para establecer un único Sistema de Salud que garantice el acceso y cobertura universal en salud en igualdad de condiciones, en forma equitativa, oportuna y de calidad para la población en los diferentes niveles de atención, garantizando acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas y epidémicas, contratación suficiente de personal de salud (capacitado, motivado y equipado para prestar servicios que respondan a las necesidades de los pacientes, basadas en evidencia científica y bajo el pleno respeto a la dignidad humana).

San Salvador, 31 de agosto 2020


José Apolonio Tobar Serrano
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos



LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19 NOS SIGUE GANANDO LA BATALLA Y NUESTROS GOBERNANTES CONTINUAN EN CONFLICTO; POR ELLO, EL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, JOSÉ APOLONIO TOBAR SERRANO, EXPONE:

El día de ayer se desarrollaron diversas manifestaciones del personal de salud exigiendo que se emita una ley que regule el accionar de la población y del gobierno para atender la pandemia¹; y en ese pleno ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, el personal de salud, hace sentir su malestar por dos situaciones evidentes; una, la saturación del sistema de salud -pero contamos con un hospital que no atiende pacientes porque "el equipo es muy especializado"²-, lo cual ha sido confirmado por el Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí³; y dos, la afectación natural por el fallecimiento de quienes están en primera línea de combate (personal de salud).

En más de una oportunidad he denunciado que la improvisación ha sido la constante en las medidas adoptadas por el gobierno en el abordaje de la pandemia; lo que ha generado afectaciones a los derechos humanos de la población salvadoreña; ahora, esta situación ha alcanzado a quienes nos cuidan en la enfermedad, el personal de salud, pues según nota periodística⁴ la falta de equipo de protección, y el alto número de casos positivos atendidos ha propiciado el contagio rápido en el personal de salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social; a lo que debe sumarse el escaso descanso en todo el personal de salud que ha terminado en los fallecimientos arriba indicados.

A lo anterior se suma el hecho que el día 8-VII-2020 oficialmente se conoció sobre 278 nuevos casos⁵; y las personas fallecidas suman 243; conociendo a través de medios de comunicación la pérdida de tres hermanos⁶ (uno de ellos, médico) con algunos días de diferencia, todos a consecuencia del COVID-19.

¹ "Protestas simultáneas de empleados de salud en varios puntos de El Salvador exigiendo una ley de emergencia"

<https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/FOTOS-Protestas-simultaneas-de-empleados-de-salud-en-varios-puntos-de-El-Salvador-exigiendo-una-ley-de-emergencia-20200709-0047.html>, consultado, a las 21:01 horas del 9-VII-2020.

² "Ministro de Salud admite que carecen de personal para atender el Hospital El Salvador porque "es muy especializado"

<https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ministro-de-Salud-admite-que-carecen-de-personal-para-atender-el-Hospital-El-Salvador-porque-es-muy-especializado-20200709-0044.html>, revisado a las 22:49 horas del 9-VII-2020.

³ "Estamos a punto de colapsar, los hospitales están sumamente saturados, estamos tratando de organizar de manera que se pueda dar atención en salud... He visto comentarios en los cuales a veces incluso personal de salud dice 'esta no es la realidad'... Es que nosotros no estamos en ningún momento tratando de ocultar que el sistema de salud se encuentra saturado, para nada, lo que estamos tratando es organizar pacientes para que hayan áreas donde se puedan recibir pacientes", "Protestas simultáneas de empleados de salud en varios puntos de El Salvador exigiendo una ley de emergencia" <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/FOTOS-Protestas-simultaneas-de-empleados-de-salud-en-varios-puntos-de-El-Salvador-exigiendo-una-ley-de-emergencia-20200709-0047.html>, consultado, a las 21:01 horas del 9-VII-2020.

⁴ "Covid-19: Médicos ISSS en riesgo por improvisación" <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Covid-19-Medicos-ISSS-en-riesgo-por-improvisacion-20200709-0030.html>, revisado a las 21:39 horas del día 9-VII-2020.

⁵ <https://covid19.gob.sv/>, consultada a las 21:24 horas del día 9-VII-2020.

⁶ "Mueren tres hermanos en los últimos doce días por covid-19, uno de ellos era médico" <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mueren-tres-hermanos-en-los-ultimos-doce-dias-por-covid-19-uno-de-ellos-era-medico-20200709-0074.html>, revisado a las 21:29 horas del 9-VII-2020.

La saturación del sistema de salud, se ve reflejado en el que hecho que según datos periodísticos⁷ hay personas que fallecen en los pasillos del Hospital General del ISSS y otros son atendidos en la calle; lo cual es concordante con datos de esta procuraduría que contabiliza en 52 los hechos denunciados por personas que expresan no haber recibido atención médica al avocarse a un centro de salud⁸; por lo anterior, la organización “médicos sin fronteras”⁹ alerta sobre el incremento de muertes en las viviendas; y es que tiene sentido, pues la población está dejando de consultar algún padecimiento en centros hospitalarios porque no están siendo atendidos debido a la saturación del sistema; y porque se siente temor de contagiarse de COVID-19 en los casos que no es ese el padecimiento sufrido.

Como Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, estimo que mantener los niveles de confrontación entre los funcionarios(as) de los Órganos Ejecutivo y Legislativo sólo está logrando que el número de salvadoreños contagiados y fallecidos por COVID-19 aumente; lo que por supuesto implica violación de derechos humanos.

Mientras eso pasa El Salvador cuenta con un Hospital que no atiende pacientes porque “el equipo es muy especializado”¹⁰ y no se cuenta con personal idóneo para ello; se conoce de la inauguración de los hospitales provisionales de Tecoluca y Jiquilisco, pero no se sabe si están atendiendo pacientes positivos a COVID-19. La desesperación del personal de salud ya es visible ante la ausencia de un plan gubernamental integral para hacerle frente a la pandemia; en la Asamblea Legislativa se sigue dilatando la emisión de una ley de acuerdo a los parámetros previstos por la Sala de lo Constitucional en la sentencia del día 8-VI-2020 en el proceso Inc. 21-2020 acumulado; el presidente de la república vetó del Decreto Legislativo 661 que contenía la Ley Especial de Emergencia por la pandemia, pero emitió el Decreto Ejecutivo 31, hasta ahora vigente; y lo ausente, es el seguimiento de parte de la Sala de lo Constitucional para verificar el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia antes referida; por ello, es preciso exhortar a las instituciones democráticas del país para que ejerzan sus funciones de acuerdo a lo prescrito en el artículo 1 de la Constitución de la República que establece “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado (...) es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”, por lo que conforme a la facultad que me ha sido conferida en el artículo 194 romano I de nuestra Carta Magna, **EXHORTO:**

1. Al Ministro de Salud, doctor Francisco José Alabí, que presente un plan integral de abordaje a la pandemia generada por el COVID-19; en el que se incluya el equipamiento total y adecuado a todo el personal de salud para evitar que dicho sector continúe siendo contagiado por el referido virus.

⁷ “Pacientes con COVID-19 mueren en los pasillos del hospital general del ISSS mientras otros son atendidos “en la calle”, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/covid19-coronavirus-hospital-general-iss-muertos-en-pasillos/728809/2020/> revisado a las 21:44 horas del 9-VII-2020.

⁸ Dentro del número expresado, se contabiliza 6 por denegación de acceso a los establecimientos, bienes y servicios de salud como resultado de la discriminación de cualquier tipo; 13 por denegación de atención médica gratuita en casos de emergencia; y 33 por denegación de asistencia médica a grupos en condición de vulnerabilidad según sus necesidades específicas. Datos obtenidos del 21 de marzo al 10 de julio, ambos del año en curso, en el Sistema Informático de la PDDH con base a registros realizados por el personal institucional.

⁹ “Médicos Sin Fronteras alerta sobre alza de muertes en viviendas y la incapacidad de Salud para responder a la pandemia” <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/coronavirus-medicos-sin-fronteras-advierte-de-muertes-en-casas/731603/2020/>, consultado a las 22:40 horas del 9-VII-2020.

¹⁰ Ministro de Salud admite que carecen de personal para atender el Hospital El Salvador porque “es muy especializado” <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ministro-de-Salud-admite-que-carecen-de-personal-para-atender-el-Hospital-El-Salvador-porque-es-muy-especializado-20200709-0044.html>, revisado a las 22:49 horas del 9-VII-2020.



PROCURADURÍA
PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

2. Al señor Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, que priorice en su retórica el diálogo con la paciencia, diligencia, humildad, tolerancia, sabiduría, objetividad y capacidad de concertación que caracteriza a un bien estadista; para hacer efectivo el mandato previsto en los artículos 1, 167 ordinal 2° y 168 ordinal 3° de la Constitución de la República.
3. A los y las diputadas de la Asamblea Legislativa construir, discutir y aprobar una normativa que cumpla los parámetros previstos por la Sala de lo Constitucional en la sentencia del día 8-VI-2020 en el proceso Inc. 21-2020 acumulado; recordando que el imperativo del artículo 1 de la Constitución de la República también les es aplicable.
4. A los señores y señora magistrada de la Sala de lo Constitucional que, dentro de sus facultades constitucionales y legales, generen el mecanismo correspondiente de seguimiento para verificar el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia emitida el día 8-VI-2020 en el proceso Inc. 21-2020 acumulado.
5. A la población en general, practicar hábitos de higiene personal, tales como el lavado constante de manos, y normalizar el uso de mascarilla guardando el distanciamiento físico.

San Salvador, 10 julio 2020.

José Apolonio Tobar Serrano

Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos



PRONUNCIAMIENTO DEL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, JOSÉ APOLONIO TOBAR SERRANO ANTE EL COLAPSO DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD DE EL SALVADOR FRENTE AL COVID-19.

Con base al mandato constitucional de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos y por ende supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas; ante las denuncias recibidas por inadecuada atención médica, aunado a los monitoreos realizados en los distintos medios de comunicación, denuncias públicas hechas por personal de salud sobre saturación de pacientes en los distintos establecimientos de salud y la ausencia de equipo de protección personal para el buen desempeño de sus labores, expreso mi preocupación, siendo de suma urgencia que todas las instituciones del Estado, sin excepción, realicen el máximo de sus esfuerzos para enfrentar la crisis sanitaria del país, sobre todo, el ente rector en salud, junto a los demás miembros del Sistema Nacional Integrado de Salud para que se trabaje bajo un plan emergente con la debida coordinación, a efectos que se garantice el derecho humano a la vida, a la integridad personal y a la salud de todos los y las salvadoreños(as), así como de los derechos laborales del personal de salud que está atendiendo en Covid-19 en primera línea.

Personal de salud del Hospital Nacional Especializado Rosales, ha denunciado públicamente la grave situación en la que se encuentran, dada la saturación de pacientes con resultado positivo de Covid-19 o sospecha del mismo, habiéndose convertido todo el sector norte de los Servicios de Cirugía del Hospital, en zona de "griparios" (atendiendo personas con sospecha o positivas a Covid-19). También consideran grave que se haya dejado de atender a la gran mayoría de personas que tienen otras patologías médicas y quirúrgicas que acudían para sus tratamientos, como es el caso de los pacientes con enfermedades crónicas dejándoles en grave riesgo de muerte, incluso, para aquellos pocos que han tenido acceso a sus tratamientos, al exponerlos a contagio cuando son atendidos en el mismo centro hospitalario. Asimismo, han denunciado públicamente la falta de equipo de protección personal (EPP) adecuado (nivel 2 y 3) para personal médico, de enfermería, paramédico y de servicio; la falta de capacitación del personal para la atención de los pacientes con Covid-19, derivando en una improvisación en la atención, siendo el resultado, la muerte de muchos profesionales de la salud, en un Sistema Nacional de Salud colapsado en su estructura física con carencias en medicamentos, equipo, tecnología; y aún más grave, la falta de recursos humanos¹.

Igual situación ha denunciado personal de salud que labora en el Hospital General y Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS. La sobresaturación en el área de emergencias, pacientes en los pasillos, incluso atención de pacientes en la calle, estando algunos hasta 4 días sentados en una silla conectados a los tanques de oxígeno esperando una camilla, muchos de ellos fallecen sin recibir una atención adecuada. Denuncian que las áreas de: Observación, Máxima Urgencia, Cirugía Ambulatoria y los niveles 4 y 5 del edificio del Hospital General están sobresaturados, a su máxima capacidad, se han convertido en un hospital híbrido ya que atienden pacientes por Covid-19 y por otras patologías, a quienes se les expone dado que el nivel de

¹ Comunicado público del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales SIMEHR, de fecha 16 de marzo de 2020, publicado en el Diario de Hoy de la misma fecha, Pag. 19 y Comunicado público de fecha 16 de junio de 2020.

contagio cruzado es muy alto.

Los denunciantes afirman que a diario mueren aproximadamente diez pacientes, algunos de éstos en los pasillos, en donde se han instalado algunas camillas, colocado colchonetas en el piso compartiendo espacio con personas que padecen problemas respiratorios las cuales esperan ser conectadas a tanques de oxígeno, cerca del área de Trauma, donde se ha improvisado la Unidad de Cuidados Intensivos, aunado a ello, denuncian la falta de EPP de bioseguridad así como insumos para poder brindar una adecuada atención médica, situación que han hecho del conocimiento de las autoridades de Dirección y Subdirección del Hospital, quienes les han manifestado que no tienen autonomía para actuar por ser parte de un organigrama que estructura la atención a nivel de país, no brindándoles solución a la problemática existente.

La falta de organización genera una inadecuada distribución de la carga laboral, las jefaturas ante la falta de EPP les obligan a reutilizar el traje que ya han usado por varias horas en contacto con pacientes positivos a covid-19, no cuentan con los espacios adecuados para brindar los tratamientos, y la falta de oxígeno, galvanómetro y camas, hace que la mayoría de pacientes continúen muriendo sin una adecuada atención médica, por lo que exigen a las autoridades una atención digna a los pacientes, la adecuación del hospital con el equipo apropiado y el debido protocolo de seguridad². Denuncian que debido a la improvisación con la que se actúa en el Hospital General y Médico Quirúrgico del ISSS en la atención de pacientes Covid-19, la falta de EPP y la negativa para hacer las pruebas por Covid-19 ha permitido una rápida propagación del virus en el personal médico, no teniendo a la fecha datos oficiales de cuántos de ellos han sido infectados y tampoco de los decesos.³

Asimismo, personal médico del Hospital Nacional General "San Rafael" de Santa Tecla, ha expresado públicamente que dicho nosocomio está al borde del colapso, a la vez que informan que han hecho del conocimiento a las autoridades del mismo que ya no hay capacidad de ingreso para más pacientes; sin embargo, la instrucción es seguir recibiendo pacientes Covid-19, mientras que la morgue también está colapsada. "Hasta esta hora (10 am del día 20 de junio 2020) no han venido a retirar a ningún fallecido y de hospitalización hay que bajar cadáveres" informaron, enfatizando que la situación en el lugar es difícil, que ya no tienen capacidad ante la demanda de pacientes. Instaron a las autoridades a que definan planes de atención a la crisis⁴.

Se esperaba que, con la inauguración de la primera fase del Hospital El Salvador, se descongestionara el Sistema de Salud saturado a causa del Covid-19; sin embargo, según información brindada en los distintos medios de comunicación, esta infraestructura hospitalaria no cuenta con los equipos, insumos, medicamentos, área de lavandería y sobre todo, no cuenta con el recurso humano para brindar la atención, situación afirmada por el Ministro de Salud doctor Francisco José Alabí Montoya, al señalar que la primera fase de ese hospital fue diseñada con 400 camas, de las que más del 50% no son utilizadas, teniendo graves problemas para encontrar personal

² El Salvadorcom(@elsalvadorcom) 27/06/2020, La falta de camillas, oxígeno e incluso de personal para atender pacientes en el Hospital General del ISSS son dificultades que lleva varios días sin solucionarse. Tweet recuperado de: <https://twitter.com/elsalvadorcom/status/1276983646600130560?s=08>.

³ La Prensa Gráfica, de fecha 9 de julio de 2020, Pág. 2.

⁴ La Prensa Gráfica (@prensagrafica) 21/06/2020, El Hospital San Rafael de Santa Tecla ya no da abasto para atender a pacientes con covid-19 y siguen recibiendo más. Ayer la morgue ya estaba colapsada de fallecidos, según personal médico del nosocomio. Tweet recuperado de: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hospitales-desbordados-por-pacientes-de-covid-19-en-El-Salvador-20200620-0040.html>.



médico especializado para atender a los pacientes que necesitan cuidados intensivos⁵; derivándose situaciones como la denunciada públicamente por personal médico del Hospital General, y Médico Quirúrgico y Oncológico del ISSS, en donde se ha instruido no ingresar pacientes con Covid-19 a las Unidades de Cuidados Intensivos aunque necesiten ventilación, siendo la orden enviar al Hospital El Salvador a los pacientes, quienes deben ir con médico y enfermera, situación que no es posible según los médicos, dada la falta de personal que ya tienen los hospitales del ISSS⁶.

El Ministro de Salud ha confirmado que el Sistema está colapsado, incluso luego de habilitar cuatro hospitales temporales (los cuales, según investigación realizada por esta Procuraduría, no están capacitados para atender a pacientes en estado crítico). El Suscrito considera que no basta con que las autoridades reconozcan el colapso del Sistema Nacional Integrado de Salud y de afirmar que se ha inaugurado varios hospitales temporales; sino más bien, el ente rector en salud y demás instituciones del Estado deben bajo la guía de expertos de forma urgente elaborar un plan de atención de la emergencia ante el colapso del Sistema de Salud, definiendo líneas generales y específicas de trabajo para todos los miembros del Sistema, existiendo un mayor liderazgo y trabajo conjunto entre los representantes del MINSAL, ISSS, COSAM (Comando de Sanidad Militar) ISBM, (Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial) y sector Privado, actuando como un verdadero Sistema Integrado de Salud, en cuanto a la atención tanto en los establecimientos del tercer nivel, como en el segundo y primer nivel de atención, definiendo los roles de trabajo del personal de salud, los hospitales que atenderán solo pacientes Covid 19 y de aquellos en los que se brindaran los otros servicios de salud, o habilitando áreas temporales de atención en los mismos establecimientos, cuidando estrictamente el nivel de contagio cruzado, entre pacientes y personal de salud.

Al respecto, se considera prioritario que se defina en el plan que se elabore, la atención que los hospitales especializados del tercer nivel de atención brindan a los pacientes que consultan por otras patologías médicas y quirúrgicas, misma que fue suspendida por las autoridades de salud⁷ y que sigue sin atenderse, dejando en grave riesgo de fallecer a muchos pacientes sobre todo aquellos con enfermedades crónicas que recibían tratamientos en los hospitales Rosales, Zacamil, Médico Quirúrgico y Oncológico, General del ISSS, entre otros; por lo tanto, urge que se tome en cuenta el restablecer la atención médica para ellos, ya que muchos por temor a contagiarse, por la falta de acceso a medios de transporte y por la suspensión de tratamientos y consultas, su salud se ha visto desmejorada, algunos falleciendo sin la atención médica adecuada, en silencio y con resignación en sus casas

⁵ La Prensa Gráfica, de fecha 10 de julio de 2020, pág. 4.

⁶ La Prensa Gráfica, de fecha 9 de julio de 2020, Pág. 3.

⁷ El Ministerio de Salud mediante el comunicado de fecha 15 de marzo del presente año, en el marco de las medidas por el COVID-19 estableció en los 30 hospitales y unidades de la red pública a nivel nacional la siguiente medida: "Se suspenderá la atención de la consulta externa a partir del lunes 16 de marzo del presente año y hasta nuevo aviso. A cada paciente se le reprogramará la cita y se le informará oportunamente... Solo se atenderán los servicios de emergencia y también se dará atención a pacientes con enfermedades crónicas con alto riesgo de descompensación". Medida que a la fecha ha afectado a muchos pacientes que no han recibido sus tratamientos y medicamentos, incluso aquellos con enfermedades crónicas debido a la falta de un mecanismo efectivo por parte del Gobierno para trasladarse a los establecimientos de salud.

junto a sus familias; es decir, urge que las autoridades definan y unifiquen en el sistema hospitalario, el abordaje en la atención médica, garantizando el derecho a la vida, integridad personal y a la salud de las personas, así como el derecho al trabajo en condiciones dignas para el personal de salud que se encuentra en primera línea frente al Covid-19.

A la problemática anterior, se suma la falta de acceso a la información sobre manejo, tratamiento y evolución de la pandemia por Covid-19 para el personal de salud, en los distintos sectores en los que brindan sus servicios, a medios de comunicación y para la población en general, desconociendo las condiciones de los establecimientos de salud, qué tipo de servicios se están brindando (atención a pacientes Covid-19 o de otras patologías), sobre los tratamientos que se están utilizando, la información del estado clínico de los pacientes a sus familiares, los lineamientos técnicos que se están utilizando, cómo se están haciendo los diagnósticos negativos a personas que no se les han hecho la prueba, pudiendo estar asintomáticas, la prescripción de sus tratamientos, cómo se han estado planificando las cuarentenas, información sobre las razones por las cuales no se les está realizando las pruebas al personal que está atendiendo el COVID-19 en primera línea, ni siquiera a los pacientes hospitalizados graves o críticos, situación que contrasta con los datos oficiales del Gobierno, desconociendo a quienes se les está realizando las pruebas⁸, información que considera el gremio médico solo es manejada por el círculo oficial⁹.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que es deber de los Estados asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el Covid-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Los órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales¹⁰. Tal derecho de acceso a la información, también es garantizado en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud (art. 13) y la Ley de Acceso a la Información Pública (arts. 31 y 36).

La Comisión Interamericana señala también que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus, deben tener como centro, el pleno respeto de los derechos humanos, lo que comprende la restricción al ejercicio del poder estatal; es decir, requiere que cualquier órgano, funcionario de Estado y toda institución de carácter público, se abstenga de violar los derechos humanos. La improvisación en la prestación de los servicios de salud, la falta de un plan de abordaje conjunto en el Sistema Nacional Integrado de Salud, la falta de protección a los trabajadores de la salud y la falta de información por parte del Gobierno de la República como ente obligado a garantizar la misma, ha derivado en graves afectaciones a los derechos humanos a la vida, a la integridad personal, a la salud, al trabajo y al acceso a la información de la población salvadoreña.

En tal sentido, conforme al mandato conferido en el artículo 194 romano I ordinales 1°, 2°, 3°, 7° y 10° de la Constitución de la República, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos:

⁸ La Prensa Gráfica, de fecha 11 de julio de 2020, Pág. 2 y 3.

⁹ La Prensa Gráfica, de fecha 27 de Marzo de 2020, pág. 22.

¹⁰ CIDH. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución I/2020. 10 de abril de 2020, literal C Parte Resolutiva, N° 3 párrafo c.



PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

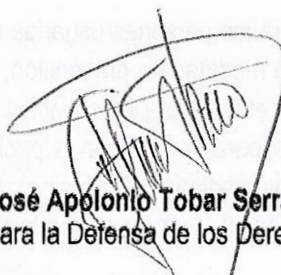
1. Exhorto al Presidente de la República señor Nayib Armando Bukele Ortiz, al señor Ministro de Salud doctor Francisco José Alabí Montoya, a la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social licenciada Rosa Delmy Cañas de Zacarías, a la Presidenta del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial Licenciada Silvia Azucena Canales Lazo, al Coronel Amilcar Salvador Mejía del Comando de Sanidad Militar, coordinar de forma conjunta y con carácter urgente, con expertos en salud, con representantes del Colegio Médico de El Salvador y el sector privado que brinda servicios de salud, la elaboración de un plan de abordaje integral para la atención de la pandemia por Covid-19, debiendo contener dicho plan, el pleno respeto de los derechos humanos y considerando las medidas siguientes:
 - a) Unificación de criterios en cuanto a la atención que se brinda en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud;
 - b) Acceso a la información para las personas usuarias del Sistema Nacional Integrado de Salud y para el resto de la población, sobre medidas de prevención, contención, tratamiento, rehabilitación y evolución del Covid-19, así como para el acceso a los servicios de salud;
 - c) Definir los establecimientos para la atención a pacientes con Covid-19 y de aquellos que requieren atención por otras patologías médicas o quirúrgicas; en su caso definir las áreas específicas habilitadas en los establecimientos de salud, siempre evitando el contagio cruzado para los pacientes, familiares y personal de salud;
 - d) Garantizar la protección adecuada a los trabajadores de la salud, brindándoles el equipo de protección personal apropiado (nivel 2 y 3) para el desempeño de su trabajo, los insumos, medicamentos y equipos necesarios para brindar la atención.
 - e) Generar la activación del primer y segundo nivel de atención, o su equivalente en los demás sectores que brindan servicios de salud, para desarrollar un trabajo conjunto, coordinado e integrado tal como está diseñado el Sistema de Salud.
 - f) Garantizar la realización de pruebas de Covid-19 al personal de salud y a los pacientes, así como su respectivo procesamiento, debiendo informar los resultados de forma oportuna.
 - g) Transparentar el mecanismo de realización de las pruebas de Covid-19, y los sectores de la población a quienes se les está realizando la misma; incluyendo a las personas con afectaciones en su salud, así como los trabajadores de la salud en la realización de las mismas.
 - h) Adoptar todas las medidas posibles para dotar de los equipos, insumos, medicamentos y recursos humanos a los denominados hospitales "temporales" sin menoscabar el funcionamiento del resto de hospitales del Sistema Nacional Integrado de Salud.
 - i) Tomar en cuenta las medidas que los expertos en salud recomiendan, sobre la base de la información que a la fecha se tenga en relación a la evolución de la pandemia.
 - j) Asegurar las perspectivas de protección integral de los derechos humanos y de la salud pública frente a la pandemia del Covid-19.

A las autoridades precitadas, informar en un plazo de setenta y dos horas a partir de la notificación de este documento, sobre las acciones a realizar para contar con un plan de abordaje integral para la atención de la pandemia por Covid-19, atendiendo de forma prioritaria y urgente lo relativo a las medidas de protección para el personal de salud y la definición de los mecanismos de atención a los pacientes que solicitan atención por Covid 19 y para aquellos que consultan por otras patologías.

Asimismo, a las autoridades precitadas les solicito que en un plazo de diez días contados a partir de la notificación del presente, remitan una copia del plan de abordaje integral que se elabore o que ya se haya elaborado, con la finalidad de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y al trabajo en el marco de la pandemia.

Pongo a disposición para efectos de comunicación, las siguientes direcciones electrónicas despacho@pddh.gob.sv, y desc@pddh.gob.sv, así como la dirección institucional 5ª Avenida Norte y 19 Calle Poniente, número 12, Poligono W, Urb. Guadalupe, Centro de Gobierno, San Salvador.

San Salvador, 13 de julio de 2020



José Apolonio Tobar Serrano
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos





PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Comunicado del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, en conmemoración del Día del Profesional de la Medicina, en memoria y reconocimiento de las personas trabajadoras de la salud que han fallecido víctimas del COVID-19.

En el contexto actual, en que El Salvador atraviesa la mayor crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, este día en que se conmemora el Día del Profesional de la Medicina, quiero expresar un reconocimiento especial a todas las personas que ejercen la profesión médica; más aún al conocer como están enfrentando con valentía la dura tarea que ha impuesto la citada emergencia. Hago extensivo también mi reconocimiento a todas aquellas personas trabajadoras de la salud y personal de apoyo hospitalario que coadyuvan en la labor médica, cuyo aporte es indispensable en el restablecimiento de la salud de las personas.

Es un día propicio también, para expresar mis condolencias y solidaridad a las familias de todos los profesionales de la medicina y demás personas trabajadoras de la salud que han fallecido a consecuencia del COVID-19, contabilizando a la fecha más de 65; todo, por no contar desde que fue alertada la pandemia, con los equipos de protección personal de bioseguridad, adecuados y suficientes para el desempeño de sus labores, no obstante que desde marzo el personal sanitario advirtió de las necesidades y señaló la carencia de dichos insumos, de falta de protocolos y de medidas improvisadas que los colocaban frente al contagio directo en los centros de atención del COVID-19.

En varias ocasiones esta Procuraduría ha realizado peticiones a los titulares de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Integrado de Salud, y al señor Presidente de la República, que se proporcionara a todo el personal médico de los equipos de protección adecuados.

Debe destacarse también el valor de humanidad y solidaridad de los profesionales de la medicina y demás personal de salud, quienes a pesar de las largas jornadas laborales, la sobrecarga de trabajo, la falta de equipo de protección personal, y verse afectados en su salud ponen en riesgo su vida por salvar la de otras personas pero desempeñan su trabajo con sensibilidad haciendo honor al juramento Hipocrático.

En ese sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la pandemia, ha recomendado que los gobiernos deben "asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales de uso del personal de salud, fortalecer su capacitación técnica y profesional para el manejo de pandemias y crisis infecciosas, garantizar la protección de sus derechos, así como la disposición de recursos específicos mínimos destinados a enfrentar este tipo de situaciones de emergencia sanitaria"¹.

Esta Procuraduría ha reiterado su posición en la necesidad de dotar al personal de salud del equipo de protección adecuado; por ello, en virtud de lo anterior y en el marco de la conmemoración del Día del Profesional de la Medicina, el suscrito conforme a lo previsto en el artículo 194 romano I ordinales 1º, 7º y 11º de la Constitución de la República:

Insta al Estado de El Salvador en su rol de defensor y garante de los derechos de los profesionales de la medicina y demás profesionales de la salud, a realizar los máximos esfuerzos posibles para dotar de los equipos adecuados y demás implementos necesarios a todo el personal que se encuentra en primera línea de atención de la pandemia, así como de otras patologías que sufre la población salvadoreña.

¹ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución I/2020. Pandemia y Derechos Humanos en Las Américas. 10 de abril de 2020. Recomendación número 10.

Animo a las personas profesionales de la Medicina, y demás profesionales de la salud; así como a todo el personal que labora en el Sistema Nacional Integrado de Salud a continuar trabajando con esa vocación de servicio y humanidad que hasta ahora han demostrado en la defensa y garantía de los derechos humanos de la población usuaria frente a la pandemia por el COVID-19; pues sin su vital labor, esta crisis sanitaria se agudizaría aún más.

San Salvador, 14 de julio de 2020.



Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
República de El Salvador

José Apolonia Tobar Serrano
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos



**PRONUNCIAMIENTO DEL SEÑOR PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS, JOSÉ APOLONIO TOBAR SERRANO,
ANTE EL AUMENTO DE CASOS DE PERSONAS TRABAJADORAS DE LA SALUD
CON RESULTADOS POSITIVOS DE COVID-19 O SOSPECHA DEL MISMO.**

En cumplimiento al mandato conferido en el artículo 194 romano I de la Constitución de la República que me ha sido conferido, de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos y supervisar la actuación de la administración pública, en el contexto de la pandemia por el COVID-19 se ha tenido conocimiento a través de los diferentes medios de comunicación, que el pasado ocho de abril una enfermera del Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña", residente del municipio de Santo Tomás dio positivo al virus y se encuentra aislada junto con varios miembros de su grupo familiar.

El día trece de abril pasado, cuarenta personas empleadas del Hospital Nacional Zacamil "Dr. Juan José Fernández", entre ellos ocho médicos residentes, doce internos, dos especialistas y quince enfermeras fueron enviadas al centro de contención, instalado en el Hotel Holiday Inn, luego que estuvieran en contacto con una persona que dio resultado positivo de COVID-19; sumándose al día 15 de este mes otras diez personas trabajadoras de la salud de ese centro hospitalario que también han sido enviadas a cuarentena.

Del mismo modo, el día 14 una enfermera intensivista y un médico neonatólogo de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez", un médico pediatra de la Unidad Médica de Hopango del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS, y un médico internista del Hospital de Diagnóstico, han dado positivo al virus y una zona de ese centro de salud privado, ha sido sometido a cuarentena.

Los casos de personal de salud infectado con COVID-19 parece ir en aumento cada día, situación que se agrava no solo por estar en riesgo el derecho a la salud e integridad de las personas trabajadoras de la salud, sino también el de sus familias y demás nexos epidemiológicos que hayan podido crearse; siendo necesaria la atención inmediata por parte del Estado a través de las instituciones de gobierno competentes, para dotar de los insumos necesarios al personal de salud que se encuentra en la primera línea de contención del virus, realizando labores de cuidado en los diferentes centros de salud; exigencia que también hizo un grupo de enfermeras del Hospital Amatepec del ISSS el pasado seis de abril.

A estas demandas se sumaron también los sindicatos de trabajadores del Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD, SITRASALUD y SITRAFOS, exigiendo el abastecimiento de Equipos de Protección Personal (EPP) para todas las personas trabajadoras de FOSALUD; al igual que el Sindicato de Trabajadores del ISSS, STISSS, en su comunicado exigía que las jefaturas de esa institución proporcionaran del equipo de bioseguridad necesario a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Por su parte, el presidente del Colegio Médico, doctor Milton Brizuela, ha expresado también que el personal de salud está siendo expuesto al contagio y no se le ha dotado del EPP necesario para desarrollar su labor; y que estos insumos no se han distribuido de forma técnica para el personal, solicitando al Ministerio de Salud desarrollar los controles para el uso de equipos de bioseguridad del personal sanitario, para evitar posibles contagios por el mal

manejo de los mismos.

Esta Procuraduría el 31 de marzo de este año, emitió resolución de Medida Cautelar sobre las condiciones de pacientes con COVID-19 en el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña", y se requirió al señor Ministro de Salud entre otras cosas, "proporcionara los insumos necesarios para la protección y bioseguridad del personal médico, enfermeras y demás personal de apoyo hospitalario"¹ requiriéndole informe de ello en un plazo de tres días, el cual no tenemos respuesta a la fecha.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en la Observación General número 14 ha señalado que "el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud"; y ante el estado de emergencia en que se encuentra el país por la pandemia del coronavirus, el goce y disfrute de este derecho es la principal prioridad, iniciando por los médicos, enfermeras, socorristas de emergencias y otros profesionales de la salud que trabajan en la primera línea de la lucha contra la pandemia de coronavirus, pues tienen que continuar prestando servicios a pesar de los riesgos personales para ellos y para sus familias, entre el exceso de horas de trabajo, la angustia psicológica y el cansancio.

Asimismo, no debieran ser incluso, objeto de discriminación o rechazo por considerar que son fuente de contagio por el solo hecho de ser trabajadores y trabajadoras de la salud, pues sin su disponibilidad, conocimiento, experiencia y sensibilidad, los pacientes de esta pandemia no podrían ser atendidos ni lograr su recuperación; por lo que es obligación del Estado proporcionar equipo de protección personal adecuado y de calidad, información, formación y apoyo psicológico para facilitar la labor del personal implicado en la respuesta; pues el riesgo de contagio que corre el personal, coloca en una condición de vulnerabilidad también a los mismos pacientes, quienes podrían ver limitada su atención en salud, por la reducción del personal sanitario que deba ser aislado en centros de contención por estar infectado.

Ante tales circunstancias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado que los gobiernos deben "asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales de uso del personal de salud, fortalecer su capacitación técnica y profesional para el manejo de pandemias y crisis infecciosas, garantizar la protección de sus derechos, así como la disposición de recursos específicos mínimos destinados a enfrentar este tipo de situaciones de emergencia sanitaria"².

Por todo lo anterior en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos HAGO SABER:

- a) **Reitero la petición al Ministro de Salud, doctor José Francisco Alabí Montoya, de adoptar inmediatamente las medidas que sean necesarias a efecto de proporcionar al personal de salud, del Equipo de Protección Personal suficiente, para que puedan desarrollar su trabajo con seguridad y confianza y evitar el aumento de casos de personas**

¹ Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Expediente SS-0171-2020. Resolución de Medida Cautelar de fecha 31 de marzo de 2020. Página 12. Recomendación 1.4

² Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 1/2020. Pandemia y Derechos Humanos en Las Américas. 10 de abril de 2020. Recomendación número 10.



PROCURADURIA
PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

trabajadoras de la salud contagiadas con el virus, pues al tener resultados positivos del virus, afectará no solo a su salud y la de sus familias, sino que tendrá repercusiones en la reducción de recurso humano para atender a pacientes que requieran atención. Dicha dotación debe ser distribuida en los diferentes centros de salud del país, de manera equitativa, suficiente y asequible.

- b) **Exhorto a la Directora General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, licenciada Rosa Delmy Cañas de Zacarías,** proporcionar de forma equitativa y suficiente, del Equipo de Protección Personal a los trabajadores y trabajadoras de la salud, de los hospitales que hayan sido designados para atender pacientes confirmados con el virus o con sospecha de ello, de la red médica del ISSS.
- c) **Que en coordinación con otras instituciones públicas que atienden la emergencia nacional,** se gestione la habilitación de lugares de residencia temporal gratuita para el personal de salud que atiende a personas con COVID-19, de manera que puedan acceder a ellos el trabajador o trabajadora que desee, de forma voluntaria; como una medida de prevención para que el personal de salud con mayor exposición se mantenga aislado, contribuya a reducir posibles nexos epidemiológicos y de esa manera proteja a su propia familia.
- d) **Hago un llamado a la población en general,** a respetar la dignidad e integridad del personal de salud, quienes por la pandemia del COVID-19 ponen en riesgo su propia vida, la salud e integridad, desatendiendo y aislándose de sus propias familias, por cumplir con una labor humanitaria y solidaria, cuidando de los pacientes que necesitan una respuesta y atención médica en esta emergencia.

San Salvador, 17 de abril de 2020



JOSÉ APOLONIO TOBAR SERRANO
PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS



Pronunciamiento del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, en el Día Internacional del Trabajador y Trabajadora, en el contexto de la pandemia por COVID-19.

Este 1 de Mayo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se suma a la lucha por la reivindicación y la defensa de los derechos de la clase trabajadora que en medio de la crisis sanitaria se mantiene activa. La actual crisis generada por el covid-19 ha significado graves afectaciones a sus derechos, pues mucha de la actividad productiva del país ha sido paralizada y su fuerza laboral ha quedado en condición de vulnerabilidad por el cierre de su fuente de ingreso y negárseles el goce de prestaciones sociales y demás derechos inherentes al trabajo.

Aprovecho la ocasión para saludar y reconocer a toda la clase trabajadora del país, particularmente a aquellas que desde el inicio de la emergencia realizan esfuerzos inagotables en la defensa de la salud de los habitantes, tales como: personal médico, de enfermería, de laboratorio, de mantenimiento, auxiliares, motoristas y de otras áreas de la medicina y de apoyo hospitalario; así como a elementos de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada de El Salvador y miembros de las Comisiones Municipales de Protección Civil, quienes se encuentran en la primera línea de respuesta a la crisis; y a quienes el Estado debe asegurarles la disponibilidad y provisión oportuna y en cantidades suficientes de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales para la protección de su salud, según lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos¹.

Asimismo hago un llamado a los titulares de las instituciones del sector público y municipal, a respetar la estabilidad laboral y la garantía del debido proceso de las personas trabajadoras, cuyos derechos laborales ante la presente coyuntura deben ser garantizados, por ello debo lamentar el despido de 35 trabajadores de la Alcaldía Municipal de San Salvador, que denunciaron ante esta Procuraduría que no se respetaron los procedimientos legales para la separación de sus cargos, en el medio de esta crisis donde aumentan todas las necesidades. De igual forma exhorto a los empleadores del sector privado, respetar las normas de protección de las personas trabajadoras, observando los procedimientos administrativos y manteniendo al máximo de lo posible, las fuentes de empleo que estén bajo su responsabilidad, pues las empresas tienen un rol clave que desempeñar en estos contextos y su conducta debe guiarse por los principios y reglas de derechos humanos; por ello es preocupante la cantidad de personas que han sido despedidas de la industria textil, entre ellas las 497 personas de la empresa *Varsity Pro* y 210 personas de *Industrias Florenzi*.

El impacto económico de esta pandemia ya ha generado que las empresas no puedan cancelar salarios ni otras prestaciones a sus trabajadores; realicen despidos o suspendan contratos individuales de trabajo; de esto último es preocupante la cantidad de personas afectadas por las suspensiones de contratos, facultad concedida al empleador en el Código de Trabajo, pero que no

¹ CIDH. Pandemia y Derechos Humanos para las Américas. Resolución I/2020, 10 de abril de 2020. Pár. C.10.

ha sido retomada ni discutida en los decretos de emergencia aprobados por los Órganos Ejecutivo y Legislativo, lo cual causa preocupación ya que el Estado aún no presenta para su discusión un plan de ayuda económica para las empresas afectadas.

En cuanto al subsidio de trescientos dólares entregado desde finales de marzo y durante el mes de abril, presuntamente dirigido a personas del sector informal, debo señalar que se han recibido quejas sobre su cobertura, pero además, que éste no contempló a las que eran trabajadoras y trabajadores activos y que han sido cesados de sus empleos o se les ha reducido su salario, siendo obligación del Estado evaluar, diseñar o readecuar un plan de apoyo económico a las personas que han perdido su empleo a causa de la pandemia y recibir subsidios o asistencia en caso de desempleo, para compensar la pérdida de ganancias, tal y como lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo². Lo anterior, no hace más que hacer evidente la crítica situación de las personas trabajadoras por cuenta propia y las del sector informal, que han resultado ser los más golpeados con esta crisis, cuya fuente de ingreso depende de forma exclusiva de su actividad productiva diaria, y que en este contexto se ha vuelto casi nula, esto explicaría que últimamente hay más personas en la calle arriesgando su salud, ante la necesidad de buscar el sustento de sus familias.

Por otra parte, recientemente la Asamblea Legislativa aprobó con ligereza la Ley de Regulación de Teletrabajo³, sin embargo esta nueva normativa y sus posibles efectos no fueron analizados con un enfoque de derechos humanos, ya que si bien la tecnología podría contribuir a evitar la pérdida de empleos, generación de nuevas fuentes y mejorar ciertas condiciones asociadas al trabajo, como la reducción del tiempo de desplazamiento; en el contexto actual muchas personas están experimentando una modalidad obligatoria de teletrabajo, la que no afecta por igual a hombres y mujeres, sino que profundiza las desigualdades de género en el trabajo, pues las mujeres asumen además los roles de cuidado de las hijas e hijos, su educación, tareas de orden y limpieza del hogar y el desempeño a distancia de su propio trabajo, actividades que en hogares monoparentales, cuya cabeza de familia es la mujer, toda la carga la asume ella, sin que dicho trabajo sea reconocido ni remunerado, por lo que toda medida que el Estado adopte para enfrentar la pandemia y su impacto socio económico, debe tener enfoque de derechos humanos con amplia perspectiva de género.

Por lo anterior, con base en mis atribuciones consignadas en el art. 194 romano I, ordinales 1º, 3º, 7º y 11º de la Constitución de la Republica, recomiendo:

Al señor Presidente de la Republica, Nayib Armando Bukele Ortiz:

- a) Adoptar medidas urgentes de protección para las personas que han perdido sus empleos, que han sido objeto de suspensión de contratos de trabajo y que sus salarios y demás prestaciones laborales han sido reducidas.

² OIT. Recomendación 205. Recomendación para el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017.

³ Nota de prensa: "Emiten ley de teletrabajo y regulan la modalidad que será estrictamente voluntaria para el trabajador como para el empleador". <https://www.asamblea.gob.sv/node/10193>



**PROCURADURÍA
PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

- b) Girar las instrucciones necesarias para agilizar la creación de medidas de recuperación y rescate económico que sean dialogadas con los sectores productivos, mediante un plan de fortalecimiento de la economía, con énfasis en la ayuda directa


de la micro, pequeña y mediana empresa, al sector informal y a trabajadores por cuenta propia, a fin que la economía del país pueda reconstruirse en el menor tiempo posible. Lo anterior, tomando en cuenta que toda acción gubernamental, en el ámbito laboral debe adaptarse a las nuevas realidades, donde la seguridad y salud ocupacional y la obligación del Ministerio de Trabajo para hacerlas cumplir, son de vital importancia; por lo que deben ser adoptadas todas las medidas para la protección de las trabajadoras y trabajadores, con el estricto cumplimiento de las indicaciones de distanciamiento social que sean necesarias para evitar el avance de la pandemia.

- c) Valorar la creación de un espacio de diálogo con presencia de funcionarios de alto nivel que tengan capacidad de decisión y que se incluya representación de diferentes asociaciones empresariales, productoras y laborales de este país con la finalidad de diseñar una política pública de rescate de la economía nacional garantizando la defensa de los derechos laborales y empresariales.

Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro:

- a) Elaborar un censo, si aún no lo ha hecho, de las personas afectadas negativamente por la pandemia, y de las medidas de protección adoptadas para cada una de ellas; se detallen los procedimientos seguidos y los apoyos dados al sector empleador.
- b) Diseñe, ejecute y supervise la aplicación de un plan para la protección de los derechos laborales de las personas en el país. Así mismo, vigile que, en el desarrollo de las labores remuneradas desde el hogar, las actividades domésticas no afecten de forma desproporcional a la mujer, adoptando las medidas idóneas para atender esas afectaciones de género.
- c) Desarrollar una política de diálogo, concertación y acercamiento con todos los sectores vinculados: trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sindicales, el ámbito empleador y el gobierno, con el ánimo de buscar soluciones consensuadas a las diferentes problemáticas que los atañen.

Reitero mi compromiso, con la población trabajadora para seguir velando porque la actuación de todas las estructuras a través de las cuales se expresa el poder público, respete y garantice sus derechos laborales.



José Apolonio Tobar Serrano
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos



San Salvador, 1 de mayo de 2020



PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

PRONUNCIAMIENTO DEL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, JOSÉ APOLONIO TOBAR SERRANO ANTE AFECTACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA SALUD, TRABAJO Y ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DEL COVID-19

La limitación al derecho a la libertad personal, tránsito y de circulación establecida en el Decreto Legislativo 639¹ y Decreto Ejecutivo 24² han implicado graves violaciones al derecho humano a la salud de la población salvadoreña, sobre todo para aquellas personas usuarias del sistema público y privado de salud, que padecen enfermedades crónicas como cáncer, insuficiencia renal o trasplantados, psoriasis, lupus, hipertensión arterial pulmonar, fibrosis quística, diabetes, hemofilia, reumatismo, esclerosis múltiple, enfermedad celíaca, enfermedades de depósito lisosomal, VIH, entre otras, debido a la *suspensión* del transporte público de pasajeros incluyendo el servicio de taxi, medida en extremo rigurosa ya que les ha imposibilitado tener acceso a terapias de diálisis, hemodiálisis, quimioterapias, radioterapias, entre otras, así como también, el retiro de sus medicamentos.

El Presidente de la República Señor Nayib Armando Bukele Ortiz estableció como mecanismo para solucionar la falta de transporte público de pasajeros para las personas con enfermedades crónicas, la habilitación del número de teléfono 2121-4010 y el 132 del Sistema de Emergencia Médica (SEM), con la finalidad de ofrecer transporte gratuito³; sin embargo, por información brindada en los distintos medios de comunicación⁴ y denuncias recibidas en esta Procuraduría, se tiene conocimiento que el mecanismo aludido no ha sido efectivo, dado que al ser activado por las personas usuarias de los servicios de salud, no han tenido respuesta *quedándose muchas personas sin poder recibir sus tratamientos médicos o teniendo que caminar durante horas para poder llegar al centro médico*, situación que también afecta a aquellos grupos en condición de vulnerabilidad como las personas con discapacidad y adultos mayores que por su condición les es más difícil el acceso *o la llegada a los servicios públicos y privados de salud*.

La situación expuesta evidencia una clara violación a lo establecido en el artículo 3 numeral 5 parte final del Decreto ejecutivo 24 que establece: "...El Gobierno brindará a todas las personas con enfermedades crónicas, cáncer, insuficiencia renal, diabetes, terapias y otras enfermedades analógicas, transporte gratuito desde su casa al hospital y viceversa", al artículo 8, lit. d) numeral 2 del Decreto Legislativo 639 respecto a las personas con causa justificada para poder circular, así como al derecho humano a la salud establecido en los artículos 1, 2 y 65 de la Constitución de la República; 3 y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Esta Procuraduría considera que el mecanismo establecido por el Gobierno, fue improvisado y poco difundido más aún, el hecho de informar a través redes sociales al cual la mayoría de la población arriba mencionada no tiene acceso, sobre todo quienes viven en la zona rural, quienes viajan a la ciudad de San Salvador para recibir los servicios especializados en salud, así como para retirar sus medicamentos en los hospitales del tercer nivel de atención del Ministerio de Salud (Hospital Nacional Rosales, de Niños "Benjamín Bloom, de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez" etc.) del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico, Materno Infantil 1º de Mayo, Hospital General etc.), de Sanidad Militar (Hospital Militar), todos de la ciudad de San Salvador.

¹ Decreto Legislativo N° 639, de fecha, 5 de mayo de 2020, publicado en el Diario Oficial N° 91, Tomo N° 427 de fecha 7 de mayo de 2020, que contiene Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19.

² Decreto Ejecutivo N° 24, emitido por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, en fecha 9 de mayo de 2020.

³ Nayib Bukele (@nayibbukele) 6 de mayo 2020, *Todas las personas con enfermedades crónicas, cáncer, insuficiencia renal, diabetes, terapias, etc., también tendrán transporte gratuito de su casa al hospital y de regreso. Solo deben llamar al 132 cuando les toque su cita (no importa si es con @SaludSV o con el @ssss_gob_sv)*. Twitter <https://twitter.com/nayibbukele/status/1258229155482779651>.

⁴ <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/paciente-insuficiencia-renal-varado-sin-transporte-restricciones-cuarentena/712424/2020/>. "Nosotros, los que padecemos de esta enfermedad, necesitamos transporte. No podemos quedarnos en la casa o nos vamos a morir", señala José Domingo Flores, paciente de Insuficiencia Renal, que salió a las cuatro de la madrugada de San Sebastián, en San Vicente. Pasada la una de la tarde, aún no encontraba la forma de regresar. Rosario Ayala, padece cáncer y esta mañana tuvo que caminar una hora y media desde la casa donde se hospeda cerca del mercado Modelo hasta el hospital de Oncología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, etc.

Diversas asociaciones de pacientes han denunciado a través de los distintos medios de comunicación la afectación de aproximadamente 300 pacientes trasplantados renales que no han retirado sus medicamentos inmunosupresores en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social⁵, situación que aumenta el riesgo de muerte. El Ministerio de Salud mediante el comunicado de fecha 15 de marzo del presente año, en el marco de las medidas por el COVID-19 estableció en los 30 hospitales y unidades de la red pública a nivel nacional la siguiente medida: "Se suspenderá la atención de la consulta externa a partir del lunes 16 de marzo del presente año y hasta nuevo aviso. A cada paciente se le reprogramará la cita y se le informará oportunamente... Solo se atenderán los servicios de emergencia y también se dará atención a pacientes con enfermedades crónicas con alto riesgo de descompensación". La cual ha afectado a muchos pacientes que no han recibido sus tratamientos y medicamentos, incluso aquellos con enfermedades crónicas debido a la falta de un mecanismo efectivo por parte del Gobierno para trasladarse a los establecimientos de salud.

Lo anterior, se agudiza con la prohibición de movilizarse a un municipio distinto al de residencia, cuando en el caserío, cantón o municipio no hay un lugar para adquirir los alimentos; más grave aún, cuando se trata de medicamentos que en el municipio donde residen tampoco se pueden adquirir y deben desplazarse a un municipio aledaño para ello, siendo más difícil cuando éstos solo son dispensados en hospitales del tercer nivel de atención (hospitales especializados), ubicados en la zona metropolitana de San Salvador.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos⁶, ha señalado que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, lo que comprende la restricción al ejercicio del poder estatal, es decir requiere que cualquier órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público, *se abstenga de violar los derechos humanos al suspender el derecho y acceso a la salud, el detrimento de la calidad de vida y se eleva el nivel de estrés de la población.*


En tal sentido, conforme al mandato conferido en el artículo 194 romano I ordinales 1º, 2º, 3º, 7º y 10º de la Constitución de la República, el susrito Procurador concluyó que se ha violentado el derecho humano a la salud y a la alimentación de la población salvadoreña en el marco de la Pandemia del COVID-19 por parte del Estado de El Salvador al no garantizar mecanismos efectivos para el acceso a servicios de salud de forma integral, *al no establecer mecanismos efectivos ante la inminente caída de la economía y el alto grado de endeudamiento lo que aumentará los niveles de pobreza, por ello:*

Exhorto al Presidente de la República señor Nayib Armando Bukele y al señor Ministro de Salud doctor Francisco José Alabí Montoya para que, de forma conjunta, con carácter urgente establezcan mecanismos efectivos para el acceso a los servicios de salud de forma integral para las personas, sobre todo para aquellas en mayor estado de vulnerabilidad como son las que padecen enfermedades crónicas y otras enfermedades análogas, personas con discapacidad y adultos mayores.

Exhorto al Presidente de la República señor Nayib Armando Bukele y a su gabinete de gobierno para que generen los mecanismos efectivos para garantizar el derecho al trabajo y a la alimentación de los sectores más vulnerables de la población salvadoreña.

Recomiendo al Presidente de la República, valore la posibilidad de crear un espacio de diálogo entre autoridades del Órgano Ejecutivo, gremiales empresariales, la academia y sector sindical, para diseñar una política pública de recuperación de la economía nacional sustentada en el respeto a los derechos de la clase trabajadora.

San Salvador, 12 de mayo de 2020


José Apolonio Tobar Serrano,
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

⁵ <https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/enfermos-chronicos-covid-19-coronavirus/712923/2020/>.

⁶ CIDH. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/20/20. 10 de abril de 2020, literal C Parte Resolutiva, N° 3 párrafo f y g.



PRONUNCIAMIENTO DEL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, JOSÉ APOLONIO TOBAR SERRANO ANTE LAS AFECTACIONES AL DERECHO A LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA SALUD POR EL USO DE LA HIDROXICLOROQUINA COMO TRATAMIENTO DEL COVID-19

Esta Procuraduría sobre la base de las facultades constitucionales de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos y supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas (ordinales 1 y 7, art. 194. I Cn.), tuvo conocimiento de denuncia presentada por la Fundación Lupus El Salvador (FUNDALUPUS) sobre posible acaparamiento y desabastecimiento del medicamento denominado plaquinol (cloroquina o hidroxicloroquina), en las farmacias de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y de farmacias del sector privado del país, luego que en distintos medios de comunicación se informara sobre resultados positivos del medicamento referido para el tratamiento del COVID-19.

Se informó que la hidroxicloroquina es la base del tratamiento para las personas diagnosticadas con lupus, porque controla la mayoría de síntomas provocados por la enfermedad, por lo tanto, la falta del medicamento pondría en grave riesgo la vida de más de tres mil personas con ese diagnóstico en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Agregó la presidenta de la Fundación que a finales de marzo ya existía desabastecimiento, debido a que en ninguna farmacia del sector privado podían encontrarlo, debiendo recurrir a la solidaridad entre pacientes, compartiendo entre quienes aún tenían, no obstante, ese mecanismo era insuficiente, quedándose la mayoría de pacientes sin su medicamento, dejando en grave riesgo su vida y su salud.

La situación expuesta fue hecha del conocimiento del Ministro de Salud, del señor Presidente de la República, del Director Nacional de Medicamentos, del Consejo Superior de Salud Pública, de la Defensoría del Consumidor entre otras autoridades competentes; sin embargo, a la fecha, no se ha tenido respuesta sobre las acciones que debían realizar para solucionar la problemática.

En Cadena Nacional de Radio y Televisión de fecha 23 de marzo del presente año, el señor Presidente de la República Nayib Armando Bukele Ortéz al respecto manifestó “Que había estado hablando con los distribuidores del referido medicamento y que básicamente todo el mundo estaba peleando por él y que se estaba volviendo escaso, que creía que El Salvador iba a poder garantizar dos millones de dosis, lo que serviría más o menos para cien mil pacientes, aclarando que no para aquellos que les daba suave (refiriéndose al COVID-19) sino a los que lo necesiten ya que era un medicamento que no se podía usar a la ligera, agregando que había ofrecido mandar aviones a traerlo y que estaban cabildeando para conseguirlo”.

En fecha 27 de marzo del presente año, expertos infectólogos salvadoreños advirtieron sobre los efectos secundarios graves del fármaco hidroxicloroquina y cloroquina difosfato, recomendando usarlo previa prescripción médica, ya que no estaban avalados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ni por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Agregaron que los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud OMS, no incluían esos medicamentos ni otros que se habían estado utilizando, debido a los efectos colaterales a nivel cardíaco y hepático, que ya se habían comenzado a registrar muertes por arritmias cardíacas de personas que motivadas por el pánico habían comenzado a tomar ya sea la hidroxicloroquina o la cloroquina fosfato, sin que ningún médico se las hubiera prescrito, razón por la que consideraban importante que se prescriba por un médico y tomando precauciones como la toma de un electrocardiograma previo¹.

¹ La prensa Gráfica, de fecha 27 de marzo de 2020, pág. 20 y 21.

La FDA mediante comunicado sobre la seguridad de los medicamentos, en fecha 24 de abril del presente año advierte en contra del uso de la hidroxiclороquina o la cloroquina para el tratamiento del COVID-19 fuera del entorno hospitalario o de un ensayo clínico debido al riesgo de problemas con el ritmo cardíaco, agrega que no afecta los usos aprobados por dicho organismo para la malaria, el lupus y la artritis reumatoide. Recomienda a los pacientes que estén tomando hidroxiclороquina o cloroquina para las enfermedades referidas deben continuar tomando el medicamento según las indicaciones prescritas. Los beneficios de estos medicamentos superan los riesgos en las dosis recomendadas para estas enfermedades².

“El 22 de abril de 2020, el Ministro de Salud, Francisco Alabi, despachó 30 mil unidades de hidroxiclороquina en los hospitales San Rafael, Saldaña y Amatepec, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y otros que brindan atención a pacientes que dieron positivo a COVID-19, las que fueron parte de un donativo para el gobierno de parte de Laboratorios Novartis y que totalizaba las 55,800 Unidades. Agregando que el gobierno compró 2,002,000 unidades de hidroxiclороquina. Lo que fue visto positivo por el Colegio Médico de El Salvador, quienes a la vez advirtieron que el medicamento no tenía respaldo científico y farmacológico”.³

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS en fecha 27 de marzo del presente año, advirtió sobre el uso de tratamientos contra el COVID-19 que no hayan sido probados clínicamente, indicó que se estaban realizando ensayos con medicamentos como la cloroquina que era utilizado para malaria y el reumatismo⁴. No obstante, por cuestiones de seguridad ese organismo en fecha 25 de mayo del presente año, anunció la suspensión temporalmente de las pruebas de hidroxiclороquina como posible tratamiento contra el covid-19, citando un estudio publicado en la revista especializada The Lancet que indica una "mayor tasa de mortalidad" de pacientes de covid-19 que habían tomado este fármaco, "Estamos actuando por precaución", dijo Michael Ryan, jefe de emergencias de la OMS⁵.

Ante el anuncio de la OMS, el presidente de la República Nayib Armando Bukele ha manifestado que el medicamento lo han sacado del protocolo oficial y lo han dejado como profilaxis, indica a la vez que con anterioridad se usaba para pacientes con lupus y que ahora tenía para darles a todos, a la vez que aclara que fue una imprecisión —que se sostuvo en el tiempo sin aclarar- afirmar en cadena nacional el pasado 17 de mayo que se había adquirido hidroxiclороquina para tratar pacientes de COVID-19 por un monto de \$575 millones, cuando en realidad fue una adquisición de \$575,000.00

A pesar de la declaración del señor Presidente, FUNDALUPUS ha continuado denunciando la falta de hidroxiclороquina en las farmacias del país para tratar la enfermedad de lupus. Supone la presidenta de la Fundación que se está utilizando para tratar a los personas diagnosticadas con covid-19, a la vez que cuestiona que ni siquiera un porcentaje mínimo se dejó para los pacientes a quienes ya se les dispensaba antes de la pandemia⁶.

A la problemática anterior, se suma la falta de información sobre el tratamiento del COVID-19 en El Salvador, tanto para el gremio médico como para la población en general, desconociendo los tratamientos que se están utilizando, el estado clínico de los pacientes, cuantos están con enfermedad leve y cuantos con enfermedad severa, que lineamientos técnicos se están utilizando, cómo se están haciendo los diagnósticos negativos a personas que no se les había hecho la prueba, pudiendo estar asintomáticas, cómo se había planificado todo el sistema de

² <https://www.fda.gov/media/137456/download>

³ <http://www.fosalud.gob.sv/gobierno-del-presidente-nayib-bukele-distribuye-30-mil-unidades-de-hidroxiclороquina-a-hospitales-que-atienden-a-pacientes-con-covid-19/>

⁴ La prensa gráfica de fecha 28 de marzo de 2020, pág. 28

⁵ <https://www.bbc.com/mundo/noticias-52801654>

En la prensa gráfica de fecha 23 de mayo de 2020, pág. 19, se estableció: “Que el estudio publicado en la revista The Lancet, se analizan datos de casi 15,000 pacientes, con covid-19 hospitalizados que recibieron cloroquina o su análogo, la hidroxiclороquina (ingeridos con o sin los antibióticos azitromicina o claritromicina) y datos de 81,000 pacientes control, los pacientes son de más de 600 hospitales. A la luz de los resultados, los investigadores sugieren que estos regímenes de tratamiento no deben utilizarse para tratar la covid-19, fuera de los ensayos clínicos en marcha.

⁶ https://www.laprensagrafica.com/amp/salud/Pacientes-que-sufren-de-lupus-aseguran-no-encontrar-medicamento-en-farmacias-para-tratar-la-enfermedad--20200525-0043.html?_twitter_impression=true



PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

cuarentena, información que considera el gremio médico solo es manejada por el círculo oficial.⁷

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos⁸, ha señalado que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos, lo que comprende la restricción al ejercicio del poder estatal, es decir requiere que cualquier órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público, se abstenga de violar los derechos humanos.

En tal sentido, conforme al mandato conferido en el artículo 194 romano I ordinales 1°, 2°, 3°, 7° y 10° de la Constitución de la República, el suscrito Procurador:

1. Exhorto al Presidente de la República señor Nayib Armando Bukele Ortiz y al señor Ministro de Salud doctor Francisco José Alabí Montoya que de manera urgente por la seguridad en la atención en salud de las personas emitan los lineamientos que correspondan a todo el personal del Sistema Nacional Integrado de Salud sobre el uso del medicamento hidroxiclороquina en pacientes sospechosos o diagnosticados con covid-19.
2. Exhorto al Presidente de la República señor Nayib Armando Bukele y al señor Ministro de Salud doctor Francisco José Alabí Montoya que de manera urgente garanticen a las personas diagnosticadas con lupus entre otras enfermedades para las cuales está autorizado el uso de la hidroxiclороquina, la dispensación del mismo, abasteciendo las distintas farmacias del país, para facilitar su acceso.
3. Exhorto al Presidente de la República señor Nayib Armando Bukele y al señor Ministro de Salud doctor Francisco José Alabí Montoya que atiendan las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales sobre el uso de los medicamentos mencionados, así como de los especialistas (infectólogos, reumatólogos etc.,) para reorientar el manejo de la pandemia por covid-19.
4. Exhorto al Director Nacional de Medicamentos doctor Mario Meléndez, al Presidente del Consejo Superior de Salud Pública licenciado Elías Daniel Quinteros Valle, al presidente de la Defensoría del Consumidor Msc. Ricardo Salazar, a realizar las acciones de su competencia sobre la base de los hechos expuestos, debiendo rendir el informe que corresponde.
5. Exhorto a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República para que realicen auditoría sobre los gastos hechos por el Gobierno durante la emergencia por covid-19, específicamente sobre la compra del medicamento hidroxiclороquina, debiendo informar a esta Procuraduría sobre los resultados obtenidos.

De las acciones que se realicen sobre lo exhortado a las autoridades referidas, rindan informe a esta Procuraduría en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la presente.

José Apolonio Tobar Serrano
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos



⁷ La Prensa Gráfica, de fecha 27 de Marzo de 2020, pág. 22.

⁸ CIDH. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución I/2020. 10 de abril de 2020, literal C Parte Resolutiva, N° 3 párrafo f y g.

